

LA IGLESIA ANTE UN CONFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR

Grupo sacerdotal



Un grupo de sacerdotes salvadoreños reflexiona desde la fe sobre la violenta realidad de su país, y propone cauces de acción eclesial que respondan a ella desde la fidelidad al Evangelio y la tradición de la Iglesia.

INTRODUCCION AL PROBLEMA

Es evidente el hecho de que la actual situación conflictiva del país está ya en una fase en que abundan situaciones en que muchos hombres y mujeres son muertos. El conflicto por lo tanto está ya en una fase que puede denominarse en parte "armada". Y a veces no sólo eso, sino "militar", es decir, de enfrentamientos bélicos entre miembros de diversos ejércitos.

Parece también muy verosímil que a lo largo de este año se desembocará en un conflicto armado que implicará a la totalidad del país. Sea que tome la forma de guerra civil o, más probablemente, de insurrección, parece inevitable el tal conflicto entre dos facciones. Los grupos de izquierda así lo afirman, los voceros gubernamentales así lo dejan traslucir, y también la derecha lo espera. En suma se espera una situación similar a la de Nicaragua en 1979.

En tal situación la Iglesia tiene la grave responsabilidad de orientar pastoralmente a los fieles y a los salvadoreños en general sobre la globalidad del conflicto y, más específicamente, sobre la actuación de la Iglesia y los cristianos en este inevitable conflicto.

Esta responsabilidad es parte de la misma tradición de la Iglesia, que por ello ha desarrollado --por paradójico que parezca a prima vista-- una doctrina tradicional sobre la guerra y la insurrección. Por difícil y desagradable que sea, también en los momentos de sumo conflicto la Iglesia tiene la responsabilidad cristiana de orientar. Así lo hicieron, por ejemplo los Obispos de Nicaragua el 2 de junio de 1979, y, después del triunfo, el 30 de julio y el 17 de noviembre de 1979.

Pero además de esa responsabilidad genérica, la Iglesia de la Arquidiócesis tiene una responsabilidad más específica. En efecto, ya en los tiempos de Mons. Chávez y ciertamente durante el ministerio de Mons. Romero, la Iglesia ha tomado postura sobre la situación del país y sobre sus conflictos. Evidentemente los conflictos anteriores al momento se han presentado más bien al nivel social y político, aunque en los últimos meses de su actividad Mons. Romero señalaba también la realidad de los conflictos armados. Esta larga tradición de la Arquidiócesis hace que el pueblo espere también ahora una orientación de la Iglesia en la nueva forma que está tomando el conflicto. No darla en estos momentos significaría por lo tanto no sólo faltar gravemente a una seria responsabilidad de la Iglesia, sino defraudar a un pueblo acostumbrado a encontrar en la Iglesia directrices, luces, esperanzas y solidaridad.

La Iglesia debe cumplir esa responsabilidad orientadora como Iglesia. No le toca a ella analizar políticamente la situación ni de cidir sobre la viabilidad del triunfo de uno u otro contendiente, aunque obviamente también debe tener presente los análisis de los técnicos en estos campos. Orientar como Iglesia significa que la finalidad de esa orientación no es otra cosa en último término que humanizar el mismo conflicto y sus resultados previsibles, y humanizarlo de la forma específicamente cristiana que le compete a la Iglesia. Esa finalidad humanizante se debe desarrollar a tres niveles.

(1) Al nivel ético se deberá pronunciar sobre la legitimidad de la guerra y sobre en qué parte de los contendientes se halla la justicia.

(2) Al nivel pastoral deberá explicar a los cristianos y ciudadanos en general las razones de ese primer juicio global, deberá orientar para que los ciudadanos tomen una opción responsable en el conflicto y, por otra parte, deberá propiciar los servicios humanitarios, necesarios en estos casos.

(3) Al nivel estrictamente cristiano o teológico deberá reflexionar sobre la palabra que Dios está pronunciando, incluso en tan trágicos conflictos, deberá propiciar los valores humanos y cristianos que se generan incluso en estos conflictos y minimizar los antivaleores que necesariamente se generan también. Deberá en suma hacer incluso del conflicto vehículo de la fe cristiana, según la ley fundamental de la encarnación en la realidad tal cual ésta llegue a ser.

Esta reflexión es por último urgente. La urgencia proviene por una parte de la inminencia de los acontecimientos y porque --como ya se ha dicho-- en el momento actual, aunque no exista guerra declarada, el conflicto ha tomado ya la forma de conflicto armado y bélico. Pero además, la situación ha cambiado tan aceleradamente que incluso las profundas reflexiones de Mons. Romero sobre el conflicto necesitan ser concretizadas, pues en los tres últimos meses lo "armado" del conflicto está saliendo más y más a primer plano. Por último la orientación es urgente porque de hecho la están pidiendo muchos cristianos, tanto los que tienen responsabilidad pastoral, como los que se sienten confusos sobre si dar el paso o no a incorporarse al proceso armado. Si la orientación de la Iglesia en sí misma no es decisiva en directo para inclinar el peso militar a un lado y otro, sí es indirectamente importante para iluminar las conciencias de quienes tienen que optar y para desbloquear falsas justificaciones ideológicas, que impidieran una justa participación en el conflicto, prefiriendo una neutralidad, que no tiene por qué ser la única opción ética de un cristiano o un ciudadano general.

Para facilitar estas reflexiones las dividimos en dos grandes apartados. En el primero se tratará de dar orientaciones generales sobre la actuación de la Iglesia en un conflicto armado; y en el segundo se abordarán algunos problemas concretos entre los que la Iglesia debe tomar postura, antes, durante y después del conflicto armado.

1. ORIENTACIONES GENERALES

1. La doctrina tradicional de la Iglesia y la situación en El Salvador.

1.1. Guerras e insurrecciones son algo "tradicional" en la historia de la humanidad. En ellas puede verse una de las expresiones más trágicas de la concupiscencia y del pecado de la humanidad, pero no se las puede ignorar como uno de los fenómenos más repetidos y constantes de la historia. Por ello la Iglesia, aun teniendo en cuenta el ideal pacificador de Jesús, no ha podido menos que elaborar una doctrina teológica sobre la guerra. Aunque la Iglesia usará de criterios previos teológicos para enfocar el problema de la guerra, es importante reclamar en esos criterios "previos" que no versan sobre algo posible, para lo que hay que estar preparados por si ocurren, o sobre algo por esencia anecdótico, sino que versan sobre algo históricamente necesario, porque de hecho ocurre abundantemente. Por eso aunque parezcan criterios "previos" son en realidad criterios elaborados a partir de una larga experiencia de hechos "posteriores" que se dan.

Lo que la doctrina de la Iglesia pretende es hacer de la trágica "necesidad" el máximo de "virtud".

Lo central de esta doctrina es que la guerra es un terrible mal físico, cuyas causas son también morales, pero a pesar de ello puede convertirse en un derecho e incluso en una obligación. En cuanto posible derecho la guerra puede ser justa. Pero además de ser posiblemente justa debe realizarse de tal manera que sea éticamente buena en cuanto al modo.

Ese mal físico que es la guerra puede convertirse en justo y bueno si se dan determinadas condiciones. Para que sea justa la guerra debe ser concebida como un mal menor para conseguir o mantener un derecho, bien sea el derecho a la legítima defensa ante un agresor injusto, bien sea el derecho a eliminar las causas que aniquilan o amenazan seriamente el bien común, y para que se obtenga un bien común mayor. Y para que sea éticamente buena debe ser en cuanto al modo más humana y lo menos deshumanizante posible. De ahí se siguen las condiciones tradicionales para declarar una guerra justa y aun éticamente buena. En el fondo se trata de asegurar que triunfe un bien mayor y de minimizar lo que de "mal" físico y

posiblemente moral hay en toda guerra. Según esto la doctrina tradicional sobre la guerra declara una guerra legítima:

- (1) Si existe una situación de evidente y prolongada injusticia que atente contra los derechos de la persona y atente gravemente contra el bien común.
- (2) Si el desenlace que se prevee no trae mayores males que la situación que se pretende superar
- (3) Si se han agotado todos los medios pacíficos para resolver la situación de injusticia.
- (4) Si la necesaria violencia de que se hace uso es proporcionada a la agresión.

Medellín en el Documento de Paz, nn. 15-19, presupone que dada la situación de ingente injusticia, violación de los derechos humanos y represión en el continente, es verosímil un determinado tipo de guerra que es la insurrección armada, y por ello toca el tema, tratando de actualizar la doctrina tradicional. En un importante punto concretiza la doctrina tradicional al afirmar que el caso de tiranía evidente y prolongada puede ser "ya provenga de una persona, ya de una estructura evidentemente injustas" (n. 19). Por otra parte recalca la necesidad de usar los otros medios específicos, y pone en guardia de que una insurrección no genere nuevas injusticias. Realistamente además avisa del peligro de "intervenciones extranjeras por ilegítimas que sean" (n. 19), lo cual pondría en peligro el triunfo de la insurrección.

Medellín, pues, quiere disuadir de la guerra e insurrección por generar males gravísimos. Sin embargo ve como verosímil que éstas se den por la trágica situación del continente. Y aun cuando recuerda todos sus peligros se ve forzado a recordar que si perdurasen estructuras injustas una insurrección estaría objetivamente justificada.

1.2. Por lo que toca en concreto a El Salvador es evidente que en los últimos cincuenta años ha vivido la situación descrita en la primera condición que legitima una insurrección. El proyecto de la oligarquía, ejecutado políticamente por gobiernos militares, ha supuesto una dictadura evidente y prolongada contra los de

rechos de la persona y contra el bien común.

A partir del 15 de Octubre de 1979 comenzó un nuevo proyecto político, que en la formulación de sus intenciones, pretendió cambiarse orden de cosas. Lo que hay que analizar es si, independientemente de las intenciones de algunos gobernantes, la situación ha cambiado objetivamente y si se puede afirmar que ya se ha superado el estado de injusticia anterior. Dicho con otras palabras hay que analizar si en la actualidad se sigue dando sustancialmente el estado de cosas de los últimos cincuenta años, aunque bajo otra fachada.

En este sentido lo primero que hay que decir es que sigue existiendo el peligro latente de que la oligarquía volviera a tomar el poder, aunque no parece que ese proyecto pudiera tener éxito a la larga, ni sería permitido por los Estados Unidos en su forma externa más burda. En segundo lugar el actual proyecto llamado reformista y antioligárquico consta de dos partes. La primera y más palpable a la corta es la inmensa represión, su escalada en cantidad y crueldad, con la finalidad objetiva de exterminar el movimiento popular. Según datos dignos de crédito a finales de Junio los muertos en el país ascienden a más de 5,000. La inmensa mayoría de ellos son frutos de masacres y represión a la población civil, llevadas a cabo por el ejército, cuerpos de seguridad y bandas paramilitares en connivencia con aquellos. Existe también un número mucho menor de muertos, fruto de ajusticiamientos de parte de la izquierda. Y por último un número de muertos, difícil de determinar, fruto en enfrentamientos estrictamente armados. La crueldad de la represión y de las masacres ha crecido espeluznantemente. Baste con citar como símbolos trágicos a lo ocurrido en el río Sumpul, Guajoyo, etc. Se da aquí la violación clara de los derechos de la persona y del derecho y necesidad de la autodeterminación de un pueblo. La segunda consiste en las reformas estructurales que en principio pudieran tener éxito y garantizar una mayor justicia social. Hay que analizar sin embargo si esas reformas son realmente viables, realizables, y si objetivamente pueden ser conseguidas sin la ingente represión. No hay que descartar que a la larga pudieran llegar a serlo. Pero hay que notar que a las inmediatas esas reformas llevan como condición necesaria históricamente la represión contra el pueblo organizado. Y hay que pensar también si el cuestionable fruto de las reformas será real antes de que la insurrección estalle de hecho. Resumiendo, la actual situación de El Salvador en su ob-

jetividad es de represión presente con muy cuestionables reformas estructurales. En su conjunto el país está ahora en la situación descrita en la primera condición para una insurrección legítima.

También aparece claro que el actual proyecto es impuesto por los Estados Unidos y en contra de la voluntad de muchos grupos populares. Naturalmente habrá que cuantificar de qué forma esos grupos populares y en general el Frente Democrático Revolucionario representa la voluntad popular y sobre todo la voluntad del pueblo suficientemente concientizado políticamente, es decir, aquella parte del pueblo que conscientemente quiere ser gestor de su propio destino. En conjunto parece que el pueblo consciente ve el actual proyecto no sólo como injusto, sino como impuesto de fuera. Con esto se viola también el derecho de autodeterminación. Y el tipo de insurrección que de ahí surja tomaría la forma de una guerra de liberación y análogamente de una guerra de independencia.

Por lo que toca por lo tanto a la primera condición para una guerra justa ésta se da objetivamente en El Salvador, visto desde un punto de vista ético. El dato más importante para la Iglesia al dar este juicio es que el número y crueldad de muertos es realmente intolerable, va en aumento y lo asemeja cada vez más al número de muertos en una guerra formalmente declarada. No se ve intención ni capacidad objetiva en el actual gobierno para terminar con esta represión. Ni se ve la determinación de acabar con la dependencia extranjera, que --éticamente-- es condenable porque propicia de hecho esta represión. La posible justificación del actual gobierno en las reformas estructurales es por ahora cuestionable y tampoco se ve cómo en un plazo inmediato estas reformas puedan ser beneficiosas para un número significativo de salvadoreños y cómo puedan ser viables si un aniquilamiento sistemático de los movimientos populares.

Este primer juicio ético es sumamente importante. Ello no quita que no haya que pensar también en la segunda condición de la doctrina tradicional: la verosimilitud del triunfo de la insurrección. Pero la posible incertidumbre sobre el desenlace no debe hacer callar el primer y fundamental juicio ético.

2. Criterios para humanizar el conflicto armado

Ya hemos mencionado que la doctrina de la Iglesia no debe reducirse sólo a legitimar éticamente una insurrección, sino a propiciar

la humanización del conflicto en general y de un conflicto armado en particular. La guerra, que en sí es un tremendo mal físico, debe ser llevada a cabo de tal modo que se consiga el máximo de humanización y el mínimo de deshumanización de los contendientes, de la población del país.

2.1. Al enumerar la tercera y cuarta condición de la doctrina tradicional sobre la legitimidad de una guerra ya se está apuntando a dos condiciones de humanización de los contendientes. Lo importante es ver cómo se cumplen en la actual situación de El Salvador.

Por lo que toca al uso de medios pacíficos previos a una guerra es claro que a diversos niveles se han intentado numerosas veces. Desde antiguo y especialmente en los últimos meses la misma Iglesia a través de sus declaraciones oficiales y de homilías de Mons. Romero y muchas instituciones cristianas han intentado constantemente animar a los cambios estructurales y a que se permita la participación popular en la conducción política del país. Los mismos movimientos populares representan en su misma existencia un modo de solucionar pacíficamente las graves estructuras injustas. Y muchas de sus acciones concretas han sido pacíficas o han usado una violencia, sustancialmente no militar, --como la presión social-- para conseguir justas reivindicaciones y para pedir su necesaria cuota de poder político. Por último la primera Junta de Gobierno representó un intento político de solucionar la injusticia por medios pacíficos.

En conjunto en El Salvador se ha intentado una solución pacífica. Las esporádicas acciones de grupos político-militares han sido mínimas hasta muy recientemente. Sin embargo esos medios pacíficos han sido inútiles para los cambios radicales que se pretenden. La renuncia de los gobernantes de la primera Junta es no sólo una expresión de la inutilidad fáctica de esos medios, sino más de fondo --como ellos mismos lo expresaron-- la expresión de la imposibilidad fáctica de cambiar por medios puramente pacíficos las estructuras injustas y las raíces de la represión al pueblo, encrustadas en los cuerpos de seguridad, en parte del ejército y en sus dirigentes.

Por lo que toca al uso de una violencia proporcionada no se puede de naturalmente predecir cómo será si se da el conflicto armado generalizado. Sin embargo tampoco conviene olvidar el tipo de respues

ta violenta que se ha dado a diversos niveles de violencia ya existentes.

Al nivel de lucha ideológica no es comparable bajo ningún aspecto la violencia, propiciada por la oligarquía y en connivencia -mayor o menor según los casos-- con el gobierno, manifestadas en campañas de desprestigio, difamación, mentira y calumnias, con la violencia ideológica de la denuncia evangélica o de la racionalidad científica o de las denuncias de los grupos populares, aun en sus formas de tipo más bien mitinesco. Si a este nivel la violencia ha sido realmente desproporcionada; esto ha provenido de la violencia de la oligarquía y del gobierno.

Al nivel de lucha social no es comparable bajo ningún aspecto la violencia de manifestaciones populares, toma de edificios, embajadas y templos, e incluso la violencia ocasional de los miembros de seguridad de las organizaciones populares, con la violencia de respuesta a esa presión social. Innumerables veces han sido ametrallados, masacrados, baleados --incluso en recintos públicos como Iglesias o la sede del Partido Demócrata Cristiano--, cateadas sus casas, capturados, torturados aquellos que sólo fundamentalmente han usado de la violencia social. De nuevo, la increíble desproporción de la violencia ha provenido de la oligarquía y del gobierno.

Al nivel de lucha militar es difícil saber la verdad con exactitud. Por una parte no se puede negar que los grupos políticos militares han realizado secuestros, ajusticiamientos sobre todo de espías, conocidos torturadores, etc. Algunas de sus acciones han ocasionado también muertes civiles inocentes, incluso de niños. Por buscar ventajas inmediatas han llevado a cabo algunas acciones de sabor más "terrorista" que estrictamente militar. Además de que con ello sus simpatías se ven mermadas, a diferencia de lo ocurrido en Nicaragua, lo que hay de "terrorismo" en la lucha armada significa siempre una desproporción cualitativa, sea cual fuere la agresión injusta. Los cuerpos de seguridad y el ejército, por otra parte, han llevado a cabo operativos militares a pueblos enteros en repetidas ocasiones, han ametrallado a la población civil, haciendo uso de helicópteros, tanquetas etc. Ni en el modo, ni en la cantidad, ni quizás sobre todo, en la crueldad de las muertes se puede comparar la violencia armada de un lado y de otro. No analizamos el caso de los enfrentamientos estrictamente militares por falta de conocimiento. Pero la conclusión que se saca es que, sin negar los excesos te

terroristas descritos, en los grupos político-militares de izquierda, éstos han demostrado más madurez, respeto a la vida, autocontrol y disciplina en el uso de la fuerza militar que los cuerpos de seguridad y el ejército. Esto da algún tipo de garantía de que en un conflicto armado globalizante, tampoco se excederán ni ensañarán innecesariamente.

2.2. Pero además de recordar y analizar estas dos condiciones de humanizar el conflicto, la Iglesia debe además --y quizás aquí está lo más típicamente suyo-- tratar de humanizar a los mismos contendientes. Esto supone dos cosas: avisar de los subproductos deshumanizadores históricamente inherentes a una lucha armada y fomentar los valores humanos que históricamente mejor surgen en un cauce conflictivo. Dicho teológicamente, la Iglesia debe anunciar principios utópicos de acción. En cuanto utópicos no son adecuadamente historizables, y además --dada la terrible realidad de una guerra y el terrible impacto en la psicología individual y social-- son difíciles de historizar. Pero sin caer en ingenuidad ni pretender una generalizada pureza en medio de la crueldad objetiva de una guerra, debe anunciar esos principios.

Negativamente debe avisar, como lo hizo Mons. Romero insistentemente, de los peligros de exclusivismo, sectarismo, dogmatismo entre los diversos grupos contendientes en favor del proyecto popular. Y avisar también a no reducir toda realidad a lo "militar". Aunque por definición en un conflicto armado, lo militar sea lo más prominente. Debe avisar de que el odio --aunque psicológicamente pueda ser inevitable-- no sea factor positivo y determinante de la lucha, de que el natural y comprensible instinto de venganza no sea incontrastado, de que la violencia, y más en concreto la violencia armada, no se convierta en mística, en modo normal y primero de solucionar conflictos.

Positivamente debe recordar que el conflicto armado es también cauce de generar profundos valores humanos, como son la fortaleza, solidaridad y sobre todo la disponibilidad a dar la vida por todo un pueblo. Se trata en último término de aprovechar y humanizar al máximo los "nobles" impulsos de justicia y solidaridad que Pablo VI y Medellín (Paz, n. 19) reconocen en muchos movimientos revolucionarios y armados. La Iglesia debe luchar para que lo mejor de su fe cristiana --aunque no fuese aceptada explícitamente como valor cristiano-- influya en humanizar la nobleza genérica de la lucha y las

actuaciones concretas de la lucha, que exigen tanto heroísmo.

De lo que se trata por lo tanto es en lo posible de evitar caer en la dinámica de una guerra, sin control, ni reflexión sino de que la misma guerra sea un cauce, trágico, pero posible, y en todo caso inevitable, de humanizar a los contendientes, sobre todo a aquellos cuyo motivo fundamental es el de liberar al pueblo y sus mayorías pobres.

II. PROBLEMAS CONCRETOS

1. Actuación pastoral de la Iglesia en la pre-insurrección e insurrección.

De lo dicho anteriormente se desprende qué opción global debiera tomar la Iglesia de acuerdo a sus propios principios. Es importante recalcar que el último criterio de opción no es "partidista", sino "popular". El criterio de opción es el bien común a las mayorías pobres del país. De ahí se deducirá el juicio sobre los diversos proyectos en el proceso, e indirecta, pero eficazmente, como hacía Mons. Romero, se favorecerá el proyecto popular. Desde este tipo de opción por el pueblo hay que recordar --y esto es de suma importancia-- que en la Iglesia somos en primer lugar "pastores". Esto significa la inherente responsabilidad de orientar al pueblo y de actuar como pastores. Baste recordar las palabras de Jesús sobre el buen pastor, contrapuesto al asalariado o mercenario.

Hay que recordar que la misión de la Iglesia es la de "asistir" al proceso salvadoreño como tal. Esta fue la actitud de Mons. Romero que debe ser proseguida y que fue lo suficientemente concreta para poder seguir siendo operativa y actual.

Hay que evitar la tentación de "simetría" o de buscar intuitivamente un imaginario centro, y recordar que Mons. Romero dejó suficientemente clara su opción por el proyecto popular y su exigencia de mejorar el proyecto popular. Hay que tener en cuenta lo que la Iglesia tiene que hacer, aunque esa acción fuese común a la de otras instituciones, y sobre todo lo que debe de hacer como algo suyo específico --que no significa escaparse a la pura espiritualidad, si-

no encarnarse de formas específicas en la historia-- y que ella, por su propia configuración histórica y social, puede hacer mejor que o tras instancias.

Desde la responsabilidad de pastores, desde la opción por los pobres y desde el recuerdo de la actuación de Mons. Romero tratamos ahora de enumerar y esclarecer las necesidades y problemas más urgentes de la Arquidiócesis.

(1) Decir la verdad sobre el país.

Los medios de comunicación, los boletines oficiales provenientes del Gobierno o los Cuerpos Armados silencian, tergiversan o mienten sobre la realidad del país. La censura consiguiente al Estado de Sitio hace además todavía más difícil que otras voces expresen opiniones distintas. En esta situación le toca a la Iglesia decir la verdad sobre el país y sobre todo decir los hechos más gruesos.

El hecho más grueso y brutal es la increíble represión por parte de la ultraderecha y de miembros de los Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hacia la población civil. Se trata de un verdadero genocidio que ha alcanzado una crueldad espeluznante (cateos, ametrallamientos, persecución de quienes huyen hasta darles muerte etc). Y se trata también de una masacre selectiva, como por ejemplo hacia los maestros, o de hechos inauditos que se van haciendo costumbre, como el rematar heridos en hospitales o asesinar médicos.

Otro hecho importante es esclarecer la realidad de las reformas estructurales, la acogida o repudio que tienen en el pueblo, las innumerables huelgas, también de empleados del estado.

Se trataría por último, aunque esto es mucho más difícil, de decir la verdad sobre los enfrentamientos estrictamente armados entre grupos político-militares y fuerzas del ejército y cuerpos de seguridad.

Además de decir la verdad sobre los hechos más gruesos hay que dar una interpretación de ellos, por lo menos en sus líneas fundamentales. En este sentido hay que denunciar como crímenes gravísimos la represión descrita a la población civil; hay que desenmascarar

rar como tendenciosas o simplemente falsas las aclaraciones oficiales; hay que cuantificar la represión e insistir en el grado de crueldad. Sólo así se evitará la impresión de que la Iglesia condena el mal venga de donde venga, con lo cual no se condena nada y se favorece a quien en verdad hace el mayor mal.

Hay que poner nombre, al menos suficientemente concreto, al pecado y a los pecadores.

Hay que desenmascarar nacional e internacionalmente la verdad del actual proyecto de la Junta, teniendo en cuenta sobre todo la campaña de propaganda montada a favor, como si las reformas anunciadas y la presencia de la Democracia Cristiana en el poder, fuese ya suficiente y automática garantía de que ese proyecto es el mejor. La Iglesia tiene en esto una gran responsabilidad, y así lo entendió Mons. Romero.

Este decir la verdad, interpretar lo más grueso de los hechos y orientar al pueblo sobre su significado debe ser hecho a través de todos los medios de que dispone la Iglesia oficial y oficiosamente. Se debe llevar a cabo a través de las homilías, de los programas de la Y.S.A.X., de ORIENTACION etc. Estos medios de comunicación deben recobrar la dirección anterior a la muerte de Mons. Romero, y deben ser ayudados eficazmente por personas con claridad de visión y capacidad técnica.

También es muy urgente recoger los datos sobre la represión, coordinarse con otras instituciones y difundirlos a nivel nacional e internacional. Desgraciadamente sólo una presentación objetiva de los hechos puede hacer ver la realidad de la situación en nuestro país. En esta difusión internacional de la verdad del país no se haría más que seguir una larga tradición de la Secretaría de Comunicaciones sociales del Arzobispado.

Es importante y urgente que la más alta jerarquía de la Iglesia se pronuncie sobre el actual momento del país y su futuro previsible. Idealmente este pronunciamiento debiera porvenir de toda la Conferencia Episcopal. Si ella no lo hiciera o si lo hiciera en forma inadecuada y poco cristiana, le tocaría entonces a la Arquidiócesis pronunciarse con claridad y espíritu cristiano.

(2) Unificación del clero, religiosos y religiosas.

Desde la muerte de Mons. Romero ha aumentado el número de los sacerdotes quienes por diversas razones han salido del país. Además es innegable un proceso de derechización de muchos miembros de el clero. Se está dando por lo tanto un proceso de dispersión y de desunión. La raíz de este fenómeno está en la misión actual de la Iglesia. Para solucionar este problema habrá que recordar en -
tonces los principios generales de esa misión.

El primer principio será recordar que los sacerdotes son en primer lugar pastores con una seria obligación hacia los fieles y una seria misión pastoral, aun en medio de las presentes dificultades. El planteamiento en la actual situación debiera ser por lo tanto "qué debemos hacer como sacerdotes del pueblo" y no "cómo podemos protegernos de los riesgos". La primera consecuencia de este principio es la permanencia al menos en el país, si no en la propia parroquia o lugar de trabajo. Esto no excluye la ayuda que mutuamente deba darse para minimizar los riesgos personales.

El segundo principio será recordar que los sacerdotes tienen una misión objetiva en favor del pueblo, una evangelización que hay que llevar a cabo según los lineamientos de Mons. Romero. Los problemas normales que surgen en situaciones como las actuales no deben plantearse desde la subjetividad --acusándose mutuamente de afiliaciones o simpatías políticas partidistas, por ejemplo-- sino desde la objetividad de la misión: Qué hacer por el pueblo.

Como en tiempos de Mons. Romero hay que volver a lograr una unidad entre sacerdotes, religiosas en pastoral, religiosos y religiosas que trabajan en instituciones educativas. En buena parte de religiosas en pastoral se ha mantenido la herencia de Mons. Romero. En las instituciones educativas hay buena disposición hacia el proyecto popular. Varios sacerdotes se mantienen junto al pueblo. Es muy importante unificar estos esfuerzos para permitir un fuerte liderazgo eclesial y hacer que éste se imponga y no sólo se tema. Para ello será muy importante la disposición de diálogo, dejándose orientar por quienes con mayor consecuencia cristiana se mantienen más unidos al pueblo, sus sufrimientos, sus causas y luchas.

La finalidad de esta unificación no es otra que la de potenciar la acción de la Iglesia y no arruinar la obra de Mons. Romero en

nombre de un pluralismo que más encubriría miedos que decisión de servicio.

Mención aparte merece la consideración del problema de los sacerdotes y la política. No es hora de analizar este tema en detalle. Pero sí de prevenir falsos planteamientos del problema que lleven a consecuencias erradas.

El planteamiento no debiera ser puramente jurídico, tratando de determinar qué es política y qué tipo de trabajo político le está permitido al sacerdote. En momentos como el presente que son en verdad excepcionales ninguna aproximación puramente jurídica al problema puede ser provechosa. Precisamente porque la ley está hecha para situaciones de normalidad. Creemos que una actuación que influya positivamente en decir la verdad sobre el país, en propiciar el proyecto popular que ofrece más justicia, más verdad y a la larga más paz no puede considerarse como trabajo político incompatible con una labor auténticamente sacerdotal; aunque habrá que reflexionar sobre la forma concreta de ese tipo de actividades.

Otra cosa será cuando el país se normalice y la misma realidad exija una "nueva" concentración en el ministerio sacerdotal. En cualquier caso, este problema de los sacerdotes y la política no debe ser zanjado con demasiada simplicidad ni con criterios puramente jurídicos y autoritarios. Eso sería errado pastoralmente en las actuales circunstancias. Por otra parte es evidente que esto no quita recalcar el ministerio normal y necesario del sacerdote en la evangelización "integral", asistencia humanitaria en tragedias humanas etc.etc.

Desde esta óptica habrá que comprender el caso de algunos sacerdotes que por diversas causas pudieran ser más útiles para el país fuera de él, que en él. En principio no se puede negar esa posibilidad.

(3) Tomar postura ante la insurrección.

En el actual proceso anterior al conflicto totalizante la Iglesia debiera mantener dos actitudes aparentemente contrarias, pero importantes por difícil que pueda parecer. Por una parte debiera evitar la psicosis de guerra alimentando siempre la esperanza de que

hubiese todavía un modo pacífico para que las fuerzas populares y democráticas accediesen realmente al poder. Por otra parte no debiera ser ingenua, y debiera por ello orientar y preparar al pueblo para ese conflicto. Esa era la dialéctica de Mons. Romero.

También creemos que al juzgar ya de las innumerables muertes debiera comenzar a distinguir entre lo que son muertes por represión --abundantísimas por parte de la ultraderecha y cuerpos de seguridad-- o algunas muertes que pudieran ser calificadas de terrorismo, por parte de la izquierda, y las muertes que ocurren de hecho en una guerra no declarada pero real entre los grupos político-militares y el ejército y cuerpos de seguridad. Esta distinción nos parece muy importante pastoralmente. El primer tipo de muertes hay que condenarlas con claridad. Al segundo tipo de muertes habría que aplicarles de hecho los criterios para la ética de guerra.

Llegado el momento de la insurrección, por difícil y doloroso que sea, la Iglesia deberá declarar de qué parte está la legitimidad. El criterio último para formular esa legitimidad será el de qué grupo fomenta de hecho mejor la causa de las mayorías secularmente oprimidas. Este no parece ser otro que el grupo que hoy se aglutina en el Frente Democrático Revolucionario, a no ser que hubiese un espectacular cambio en la correlación de fuerzas, lo que no es previsible.

Además de proclamar la legitimidad de la insurrección le tocará como Iglesia recordar la obligación de humanizar el mismo conflicto armado. A nivel de fondo y específicamente cristiano deberá recordar lo dicho anteriormente. A un nivel más concreto pero importante, deberá hacer valer su prestigio para exigir y asegurar que durante la guerra se respeten los derechos que el Derecho Internacional otorga a la población civil y a los combatientes. Si fuera posible, deberá estar dispuesta a aceptar el papel de mediación, siempre que eso hiciese menos violento el conflicto.

Dejando a un lado la discusión teórica sobre si un ciudadano tiene sólo derecho o también "obligación" de participar en un conflicto armado para que se instaure el bien común, la Iglesia deberá tratar de dar respuesta pastoral a los cristianos que pregunten sobre la licitud o no de participar en tales conflictos. Y eso no sólo cuando el conflicto se globalice, sino en el período que le precede, donde se hacen los reclutamientos. Sobre este delicado pro -

blema pastoral, en la medida que se presente, creemos que dos cosas puedan orientar.

La primera es no invocar la fe cristiana ideológizadamente para impedir que quien en conciencia cree que debe participar, deje de hacerlo. La fe cristiana habrá que invocarla y con gran vigor para humanizar tal conflicto, pero no como modo de impedir la constitución y crecimiento del ejército popular. De otra forma, al no impedir que participen en la guerra "cristianos" en el ejército oficial, se estaría ya de hecho tomando partido y dando una desventaja desleal, precisamente a quienes objetivamente menos razón les asiste en el conflicto armado

La segunda sería seguir el ejemplo de Mons. Romero cuando hablaba de las organizaciones populares. Recalcaba el derecho de pertenecer a ellas y alentaba a su participación. Por otra parte no obligaba a nadie como cristiano a pertenecer a ellas, aunque exigía de todo cristiano un trabajo para el bien común. Aunque no sea lo mismo organización popular que ejército del pueblo, pueden haber suficientes semejanzas para que el modo pastoral de Mons. Romero en tratar el tema de las O.P sirva también pastoralmente para tratar el tema de la cooperación en el conflicto armado, con todos los matices que hemos expuesto: derecho, necesidad histórica genérica, libertad individual, aporte necesario al proceso de todos, aunque desde diversos lugares.

Durante el conflicto armado y en la medida de sus posibilidades, la Iglesia debería seguir diciendo la verdad de lo que ocurre, pues previsiblemente sólo la parte gubernamental contará con medios importantes de difusión. Recuérdese la información sobre Nicaragua proveniente de fuentes oficiales. Si se tratase sobre todo de crímenes de guerra la Iglesia los debe denunciar.

Es evidente también que la Iglesia deberá llevar a cabo su labor asistencial que ya ha comenzado y debe prepararse cuidadosamente. Sin detallar ahora los campos de esa asistencia (refugios, comida, salud, mediaciones, asistencia espiritual a heridos y moribundos, lista de desaparecidos etc, etc) hay que recalcar la necesidad de que la Iglesia, usando de su prestigio propicie la coordinación efectiva de estos servicios asistenciales. Y la necesidad, ya ahora, pero sobre todo en tiempo de conflicto, de exigir y asegurar la inmunidad de ciertos edificios: iglesias, hospitales, colegios, universidades y afines.

En este servicio asistencial la Iglesia no debiera ser partidista obviamente. Debería atender a todos los salvadoreños, pero debiera evitar trasladar la necesaria imparcialidad por lo que toca a aliviar necesidades humanas y espirituales de todos los salvadoreños a la legítima parcialidad hacia el grupo que mejor defiende el bien común. Por esta razón hemos mencionado en último y no en primer lugar el servicio asistencial de la Iglesia. No porque no sea importante, sino para hacer conciencia de que en este caso se maneja una lógica distinta.

2. La Iglesia después del conflicto armado.

Puede parecer prematuro mencionar este tema, pues depende naturalmente del desenlace del conflicto. Sin embargo varias tareas previsibles se le presentarán a la Iglesia. Enumeramos las que nos parecen más fundamentales.

(1) En cualquier caso y gane quien gane, le tocará a la Iglesia exhortar a la magnanimidad en la victoria, a minimizar los instintos de venganza, a animar a la reconciliación. Deberá pues enunciar los principios utópicos antes mencionados, aun sabiendo la inmensa dificultad de llevarlos a la práctica en esos momentos. Y deberá intentar que la legislación por la que se rija el proceso después del conflicto dé cuerpo estructural a esos deseos: supresión de la pena de muerte o mínimo uso de ella, trato a exiliados en embajadas, etc. Globalmente Nicaragua ha ofrecido un buen ejemplo de esto y lo ha sancionado en sus leyes. Algo de esto habría que intentar desde la Iglesia.

(2) Si perdiese el proyecto popular le tocaría a la Iglesia reavivar la esperanza, mostrar que no todo se ha perdido pues de una generosa lucha siempre quedan buenas semillas. Y le tocaría exigir al vencedor recoger --aunque en un proyecto político distinto al de los perdedores-- lo que había de justo en la causa por la que lucharon los perdedores.

(3) Si triunfa el proyecto popular la sociedad salvadoreña entrará en una nueva estructura social, económica y política, más o menos radical o moderada, pero en cualquier caso de suficiente novedad con respecto al tipo de sociedad que ha vivido la Iglesia durante siglos en El Salvador.

Con certeza muchos cristianos se alegrarán de que así sea, y es también verosímil que las primeras declaraciones "oficiales" de la Iglesia fuesen bastante positivas. Pero por otra parte no hay que ignorar el tipo de problemática que se le presentará a la Iglesia debido a esa novedad social. Para ello hay que estar prevenidos desde ahora. Quizás convenga por ello recordar algunos principios que esclarezcan los previsibles problemas.

(a) El criterio fundamental sobre si el nuevo proceso es bueno o no debiera ser si se acercase más al ideal del Reino de Dios y no cómo le va a la Iglesia como institución en ese nuevo proceso.

(b) Como proceso limitado tendrá sus fallos y errores. No habrá que olvidar sin embargo la comparación de que si en su conjunto es mejor o peor que el sistema superado. Y ello visto desde las mayorías pobres, y no desde las minorías o desde la misma Iglesia como institución.

(c) Presumiblemente se pedirá apoyo a la Iglesia institucional y a cristianos eclesialmente cualificados, sacerdotes por ejemplo. Para decidir sobre el apoyo global y colaboraciones particulares habrá que pensar también en las excepcionales circunstancias post-revolucionarias, con necesidades objetivas inmediatas y con previsibles ataques desestabilizadores desde afuera. La Iglesia debiera por lo tanto, aun haciendo uso de mecanismos excepcionales, tratar de consolidar el proceso en sus comienzos.

(d) En una sociedad "nueva" la Iglesia institución y muchos cristianos experimentarán la sensación de un "no saber". La sociedad burguesa ha sido de hecho como el agua en la que se ha movido el pez, como el ambiente natural en que se ha movido la Iglesia, incluso cuando la criticaba. Esta novedad supone un serio problema de aprender, y también un serio reto y oportunidad para la fe en un Dios de la historia y por ello de lo nuevo. Habrá que estar preparados, por lo tanto, para una seria reflexión teológica sobre qué dice Dios a través de esta "nueva" historia, y no presumir que ya se sabe de antemano.

(e) Esta nueva sociedad verosímilmente contará entre sus gestos a no creyentes, aunque también cristianos. Aparecerá pronto el problema del marxismo "ateo". No es éste el lugar de dar tratamiento a este problema, pero sí de prevenirlo, de preguntarse de si lo

peor que le puede pasar a un país es que varios de sus dirigentes no sean creyentes, de convertir el miedo instintivo al marxismo ateo en responsabilidad de los cristianos de humanizar el proceso con lo mejor de su fe cristiana.

(f) Los cristianos de clases medias, que normalmente son influyentes en sacerdotes y obispos, podrán atemorizarse al ver los valores más típicos de las clases medias, aun los auténticos, minusvalorados, mientras que se exaltan los valores más populares. Habrá que hacer un serio esfuerzo por redirigir las actitudes espontáneas de la Iglesia hacia lo que son verdaderos valores, aprender a reconocer los valores "populares" y no abandonar tampoco lo que haya de valores auténticos provenientes de tradiciones más democráticas y aun liberales.

(g) Debiera ser innecesario decir que la Iglesia y los cristianos tendrán más influjo real en la nueva situación, con cuanta mayor honradez y dedicación hayan defendido la causa popular. La Iglesia no deberá invocar un derecho "abstracto" a influir en el país, sino un derecho "histórico", ganado en el proceso.

(h) Esto es muy importante para tener credibilidad cuando la Iglesia deba denunciar los fallos del futuro proyecto y para influir creativamente a encaminar el nuevo proyecto por los caminos más afines a la utopía del reino de Dios y del hombre nuevo del Reino.

